

Editorial

Rechazo a la reconstrucción de la pobreza

A lo largo del año pasado, la población salvadoreña sufrió la devastación de los dos terremotos, la sequía y el deterioro generalizado del nivel de vida. Son tres catástrofes que, aunque de índole diversa, tienen como común denominador la pérdida de vidas y recursos acumulados con mucho esfuerzo, a lo largo de bastante tiempo, la destrucción física de medios y modos de vida, y, como consecuencia de todo ello, la extensión y profundización de la pobreza.

Los terremotos y la sequía, a primera vista, pueden parecer eventos de carácter coyuntural, pero no es así, tanto porque su impacto destructivo sería bastante menor, si hubiera menos vulnerabilidad estructural e institucional, como porque sus consecuencias de mediano y largo plazo son de carácter permanente. El deterioro de la situación económica y social en la que vive la mayor parte de la población salvadoreña no sólo es de larga data, sino que, en la década de los noventa, ha sido mayor, precisamente por la actitud gubernamental ante sus necesidades. En cualquier caso, la vulnerabilidad y el deterioro de la situación son un obstáculo para el desarrollo sostenible del país y, por consiguiente, para hacer retroceder la pobreza por lo que destruyen o por los recursos que hay que invertir en la reconstrucción. De esta manera, los pocos avances que se hayan podido hacer fueron destruidos por los terremotos y la sequía o sus repercusiones, haciendo más difícil a las familias salvadoreñas superar la línea de pobreza.

Esta dura realidad sin perspectivas de cambio a la vista es la mejor constatación del fracaso del modelo económico y social impuesto, en la década de los noventa. La sociedad ha reaccionado de maneras diversas a este fracaso. Exceptuando al sector directamente beneficiado con ese modelo, el resto lo rechaza. Este rechazo se ha hecho extensivo a la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos. La mayor parte de la población salvadoreña rechaza reconstruir la pobreza, que es lo que el plan gubernamental propone.

1. Bajo la amenaza constante: el entorno vulnerable y precario

Los terremotos aumentaron el déficit de vivienda, de por sí ya elevado (más de medio millón), y agravaron las condiciones precarias en las que vive una buena parte de la población, tanto en el campo como en las ciudades. Pese a esta crítica situación, el país todavía no cuenta, después de un año, con un plan nacional de vivienda y limitación de riesgo de mediano y largo plazo. Es cierto que el gobierno habla de un plan de vivienda, muy bien presentado por cierto, pero que, al ser simple propaganda, no tiene ninguna consecuencia práctica. Es así como los esfuerzos para reconstruir las viviendas destruidas han sido dispersos e incoherentes. Se carece de lineamientos estratégicos y de políticas que orienten la construcción de viviendas. Ni el gobierno central ni los gobiernos locales han asumido el papel de rectores de la reconstrucción. No se trata de que el gobierno asuma el papel de ejecutor (constructor), pero sí de rector, es decir, que coordine y articule los esfuerzos de los actores claves.

Del total de viviendas destruidas por los terremotos, sólo se ha reconstruido, según fuentes oficiales, el 13 por ciento —a septiembre de 2001. Este cálculo no toma en cuenta el déficit acumulado. Ahora bien, la mayoría de las 26 mil viviendas construidas (68.95 por ciento) han sido levantadas por organizaciones no gubernamentales e iglesias con ayuda externa. Menos de la cuarta parte (21.75 por ciento) lo ha sido por el gobierno central y el resto por la cooperación internacional (5.33 por ciento) y la empresa privada (3.97 por ciento). Se constata, pues, que el esfuerzo mayor ha provenido del exterior y ha sido canalizado por organismos privados. Este hecho tiene una explicación doble: la desconfianza en la capacidad y eficacia del gobierno salvadoreño para administrar la ayuda, por parte de los donantes extranjeros, y la idea que éste tiene de la empresa privada y del Estado. En efecto, el gobierno salvadoreño asume de manera equívoca que la empresa privada es la única con experiencia para dirigir y ejecutar la tarea de reconstruir la vivienda. En consecuencia, no sólo ha abandonado la construcción de ésta, sino que también ha renunciado a su responsabilidad de dirigir y coordinar. Es así como la reconstrucción ha sido privatizada, con lo cual la decisión sobre la ubicación de los asentamientos, los sistemas de construcción, el diseño de las unidades y las formas de financiamiento —crédito o donación—, ha quedado en manos de organizaciones no gubernamentales, empresas constructoras, cooperantes internacionales y empresas privadas.

Consecuencia inevitable de lo anterior es la variedad en los sistemas constructivos y el predominio indiscutible del criterio económico sobre todos los otros. Poco se ha hecho en cuanto a tomar en consideración las variables de riesgos y vulnerabilidad, innovar tecnología en los sistemas constructivos y en el diseño arquitectónico de las unidades habitacionales, y en garantizar que los asentamientos cuenten con condiciones adecuadas de habitabilidad —como empleo cercano, acceso a servicios e infraestructura básica, equipamiento

para facilitar el desarrollo y la salud mental comunitarias. Tampoco se ha vinculado la construcción de viviendas con procesos sostenibles de ordenamiento territorial. En algunos casos se ha construido en lugares con un alto nivel de vulnerabilidad, sobre todo por la proximidad a zonas de riesgos —derrumbes o deslizamientos— o por su lejanía de servicios básicos y fuentes de empleo local. De esta manera, se está perpetuando —institucionalizando— la vulnerabilidad de la población pobre y no por falta de conocimiento, porque existen ya suficientes estudios sobre estos aspectos, sino por el predominio del criterio de la máxima ganancia, ante el cual todos los demás criterios desaparecen. No es extraño, entonces, que el sector que mayor provecho está obteniendo con esta privatización sea el de la construcción.



El gobierno salvadoreño ha hecho relativamente poco para proporcionar vivienda segura y digna a las miles de familias que carecen de ella, por falta de financiamiento —de hecho, la vivienda es un rubro al que el presupuesto nacional da muy poca importancia (0.16 por ciento)— y por la resistencia a la planificación de mediano y largo plazo. De momento, el proyecto gubernamental más ambicioso ha sido entregado a una gran empresa urbanizadora, la cual pretende construir un asentamiento modelo. Pretensión muy cuestionable, puesto que este proyecto no se diferencia de los comerciales, en cuanto a los espacios habitables, las zonas verdes, la disposición de las viviendas y sus costos. Los esfuerzos gubernamentales por interesar a los “hermanos lejanos” en financiar la construcción de viviendas no parecen estar arrojando los resultados esperados. Con alguna ayuda de la empresa privada, el Ministerio de Educación está consiguiendo levantar una parte de la infraestructura educativa caída; pero el de Salud Pública no ha podido hacer lo mismo con la red hospitalaria, que aún espera su turno.

Poco después de los terremotos, la sequía hizo estragos en la agricultura de subsistencia, al echar a perder entre el 60 y el 90 por ciento de la producción de granos básicos —una pérdida equivalente al 10 por ciento del producto interno bruto agropecuario y al uno por ciento del producto interno total. Los dos indicadores más importantes de la crisis del sector agrícola son la reducción de su producción interna bruta y la caída persistente de su tasa promedio de crecimiento. La sequía no es un fenómeno desconocido en el país, pero desde la década de los setenta se ha vuelto frecuente, volviéndose una amenaza para el desarrollo sostenible desde los noventa —ha habido sequías en 1972, 1976, 1987, 1991, 1994, 1997, 2000 y 2001. En 1972, este fenómeno era considerado eventual y muy poco probable. Por lo tanto, no se le prestó mucha atención. Exceptuando la de 1997, por ejemplo, nunca se han cuantificado las pérdidas totales.

A lo largo del año pasado, la población salvadoreña sufrió la devastación de los dos terremotos, la sequía y el deterioro generalizado del nivel de vida. Son tres catástrofes que, aunque de índole diversa, tienen como común denominador la pérdida de vidas y recursos [...] y, como consecuencia de todo ello, la extensión y profundización de la pobreza.

El fenómeno golpea un sector productivo muy poco diversificado —café, granos básicos y caña de azúcar. Por eso, lo que sucede en cualquiera de estos cultivos tiene gran impacto en el comportamiento del sector agrícola y en la economía nacional, en su conjunto. Ahora bien, el cultivo más afectado por la sequía es el de granos básicos, aunque también disminuye la producción de café. Sin embargo, el fenómeno tiene costos indirectos de gran consideración— pérdida en la producción de alimentos, disminución de la producción de hidroelectricidad, alza del precio de los granos básicos y de la energía eléctrica, disminución de las exportaciones e incremento de las importaciones de granos, desequilibrio de la balanza comercial, reducción de la recolección tributaria, saturación del mercado local y consecuente descenso del precio y reducción de la rentabilidad de la producción local de granos básicos. En esta misma edición se analizan las consecuencias negativas que tiene para el país la falta de una política nacional de energía, en particular en cuanto a la generación con fuentes renovables y al elevado costo de ésta en la actualidad.

No obstante la ocurrencia de sequías, en las dos últimas décadas, las políticas gubernamentales siguen siendo reactivas y de emergencia, lo cual, contradictoriamente, en lugar de fortalecer a un sector amenazado y vulnerable, lo han debilitado más, volviéndolo más vulnerable. La reacción gubernamental es puntual, orientada a la emergencia —control de precios, importa-

ción masiva de granos, dispensa de aranceles, racionamiento energético, incremento de la generación térmica de energía y, en los últimos años, distribución de semilla. En realidad son medidas para paliar el impacto de la sequía sobre el sector urbano: evitar la escasez de granos básicos, minimizar el incremento de los precios y garantizar el suministro de energía. Sin embargo, la situación del sector rural empeora, puesto que a sus déficit tradicionales debe agregar la competencia externa, la cual aparece al abrirse el mercado nacional a la importación de granos, reduciendo su precio y la rentabilidad de la producción local. Desde esta perspectiva, la donación de granos básicos, por parte de la cooperación internacional, no representa ninguna ventaja.

Ante la ausencia de una verdadera política nacional, el campesino reacciona de tres maneras: aumenta el área sembrada con granos básicos, utilizando terrenos no aptos para este cultivo, intensifica la extracción de recursos forestales y, o emigra. Las dos primeras reacciones no son una verdadera solución, puesto que producen deforestación y erosión, aumentan la vulnerabilidad económica y ambiental, refuerzan la dependencia de los granos básicos y crean condiciones para que las pérdidas sean mayores, en la siguiente sequía. En cambio, la emigración a la ciudad o al exterior es una salida más atractiva para el campesino, la cual, además, abre el flujo de las remesas familiares. Estas contribuyen a mantener en equilibrio al sector externo, aumentan la demanda y el consumo de la familia rural y contribuyen a reducir la pobreza en el campo —desde esta perspectiva, la emigración podría ser interpretada positivamente, aunque sin desconocer los enormes problemas sociales que conlleva. De hecho, la emigración se ha convertido en el mecanismo más eficaz para combatir la pobreza extrema en el país, tanto que, desde 1993, las remesas familiares se incluyen en los ingresos utilizados para calcular la pobreza nacional. Esta salida se ha vuelto tan importante para los pobres salvadoreños, que algunos la juzgan como la solución ideal; incluso no falta quien pueda creer que la sequía no representa mayor problema para el país, ya que sus efectos negativos pueden ser paliados con las remesas familiares. Ninguna de las dos posturas debiera olvidar que el sector campesino está en crisis permanente, que el país pierde capacidad para alimentar a sus habitantes y que la pobreza y la vulnerabilidad en el campo y en la sociedad entera se profundizan y amplían.

A estas posturas se llega por la ausencia de una política que ofrezca una solución viable y también por comodidad e indiferencia. Una política viable debe contemplar un aumento sustancial de la inversión pública y privada, en el sector agrícola y rural, incluyendo proyectos de inversión productiva, orientados a compensar o a superar el impacto de las crisis del café, las cuales serán recurrentes y constantes ante la falta de un acuerdo internacional, que ordene su producción y comercialización. También debe incluir la diversificación de cultivos, acompañada de asistencia técnica para introducir el riego y la utilización de semillas resistentes, en particular entre los pequeños pro-

ductores, que son los más afectados por la sequía, los desastres y la falta de una política nacional. Finalmente, no se debe privilegiar la zona urbana, en particular el gran San Salvador, con menoscabo del sector rural. Es necesario destinar recursos para la construcción de infraestructura, proporcionar apoyo financiero y asistencia técnica para que en lugar de expulsar población, la retenga.

2. Condenados a vivir en pobreza

Es evidente, entonces, que el elevado nivel de pobreza en el campo, en particular, en la zona oriental, no puede atribuirse a las sucesivas sequías, ni a la caída de los precios de las exportaciones tradicionales, puesto que existen condiciones internas que, de por sí, lo hacen muy vulnerable. Es necesario reconocer que cuando esa vulnerabilidad se convierte en desastre, tiene un efecto negativo no sólo en el sector agrícola, sino también en el crecimiento económico nacional. Las pérdidas del año pasado, debidas a la sequía, frenaron ese crecimiento, que, de hecho, ya es demasiado bajo para las expectativas del gobierno y de la empresa privada, y para librar una lucha efectiva contra la pobreza. Este año, el fenómeno volverá a repetirse con toda probabilidad —a causa de la corriente de El Niño, pronosticada desde finales del año pasado.

La pérdida de la cosecha de granos básicos implica hambruna, sobre todo en la zona oriental, la más pobre y golpeada por la sequía; sin embargo, las repetidas advertencias hechas por los organismos internacionales no han sido bien recibidas por el gobierno salvadoreño. Mientras el Ministerio de Agricultura y Ganadería toma las providencias establecidas para estos casos; el Ministerio de Economía, más preocupado por la imagen y los índices estadísticos, niega que el fenómeno vaya a traer consecuencias negativas para el país. Reconocer su existencia, significaría reconocer la inexistencia de una política agrícola.

El hambre aumenta la desnutrición crónica de la población rural, la vuelve más propensa a las enfermedades, puesto que posee menos defensas, y le reduce de manera muy significativa sus capacidades para desarrollar de manera normal sus actividades. Los hombres tienen menos fuerza para ejecutar unas tareas que son fundamentalmente físicas, pero las más desnutridas son las mujeres, cuyos embarazos ocurren en condiciones anémicas. En consecuencia, los niños y las niñas no alcanzan ni el peso ni la estatura esperadas —fuentes oficiales han reconocido que en el año 2001 ha aumentado el nacimiento de niños con una talla inferior a la normal, hecho atribuido de modo gratuito por el gobierno salvadoreño al exceso de trabajo y el estrés, causado por los terremotos—, su rendimiento en la escuela es bajo y la abandonan pronto para contribuir con su trabajo al ingreso familiar. De esta manera, el círculo se cierra y se reproduce una y otra vez.

El déficit de vivienda y la sequía han contribuido de manera importante al deterioro del nivel de vida de la población, pero éstas no son las únicas variables que hay que tomar en consideración. En los últimos años, la economía salvadoreña se ha caracterizado por su baja tasa de crecimiento, combinada con una maquila textil dinámica y un flujo creciente de remesas familiares, pero con una fuerte tendencia al déficit en la balanza comercial y las finanzas públicas —tal como se puede ver en el informe de la coyuntura económica del último semestre del Departamento de Economía de la UCA, publicado en esta misma edición. Sin embargo, el límite de este modelo, que descansa en la maquila textil y en las remesas familiares, pareciera haber sido alcanzado. La producción crece a un ritmo de apenas el dos por ciento, el cual resulta insuficiente para hacer retroceder la pobreza; para conseguir esta meta, habría que triplicar esa tasa de crecimiento. Peor aún, los dos pilares en los que descansa la actividad económica en la actualidad, las exportaciones de maquila y las remesas familiares, comienzan a dar señales de vulnerabilidad. Las exportaciones textiles han experimentado una reducción sensible en el último año, mientras que el ritmo de crecimiento de las remesas ha perdido dinamismo, desde septiembre de 2001. Por otro lado, las exportaciones han disminuido hasta el extremo de tener que abandonar el crecimiento apoyado en ellas, mientras que, cada año, las importaciones han experimentado un aumento importante, hasta el punto de crear un déficit de más de 280 millones de dólares en la balanza comercial. Por su parte, el gobierno necesita más de la mitad de sus ingresos actuales (57 por ciento) para financiar sus gastos. Aun cuando se asegura que la situación es manejable, este déficit no podrá ser cubierto con reformas tributarias irrelevantes como las del año 2001, las cuales, además, siguen siendo regresivas.

Esta situación de la economía nacional re-



percute de maneras diversas en el deterioro del nivel de vida de la población. La primera repercusión es el desempleo, el cual ha aumentado, alcanzando, con toda probabilidad, al 9 por ciento de la población económicamente activa. La tendencia del año pasado y de éste es a reducir puestos de trabajo, en correspondencia con el poco crecimiento de la actividad económica y un entorno mundial adverso. La segunda repercusión es el deterioro del salario real, el cual sigue perdiendo valor, mientras que el salario mínimo se mantiene invariable. En los últimos tres años, el salario real ha perdido más del 3 por ciento de su valor. El salario promedio sólo lo percibe un poco más de un tercio de los ocupados, pero una familia de tamaño promedio necesita dos de estos salarios para vivir por encima de la línea de la pobreza. Aunque la inflación mantiene su tendencia a la baja, los servicios de electricidad, transporte y agua se han encarecido, al ser suprimido el subsidio.

La lucha contra la pobreza extrema continúa siendo un reto de grandes proporciones. Desastres como los terremotos o la sequía no sólo la han extendido y profundizado, sino que lo poco que se había podido avanzar ha sido destruido, siendo necesario volver a empezar y no necesariamente desde la posición anterior, sino desde otra más precaria. Mientras no se hagan avances importantes en la reducción de la vulnerabilidad, cualquier logro estará siempre amenazado por un desastre.

Cuando se miran en retrospectiva los tres gobiernos de ARENA, se observa cómo éstos han ido introduciendo nuevas medidas de orden económico, acompañadas de un discurso que prometía desarrollo sostenible y bienestar social. La presentación de cada nueva medida retomó el mensaje que acompañaba a la anterior, sin importar que las metas prometidas hayan resultado inalcanzables. Al introducir el primer ajuste estructural y la privatización de la banca, el entonces presidente Cristiani prometió bonanza económica para todos, en especial para los más pobres, pero la situación de éstos no varió gran cosa. El siguiente gobierno de ARENA anunció nuevas privatizaciones —las telecomunicaciones, las pensiones y la distribución de energía— y nuevos tiempos y nuevo país. A estas alturas, la situación de los pobres no sólo no había mejorado, sino que éstos eran más y su pobreza era más dura. Entonces, el tercer gobierno de ARENA introdujo el cambio de moneda, la privatización de los puertos y los tratados de libre comercio con la promesa de un futuro de prosperidad y felicidad. Si estas medidas tampoco consiguen que el crecimiento se triplique y que éste se traduzca en bienestar, los gobiernos deberán encontrar algún otro recurso para mantener viva las promesas no cumplidas, durante una década de cambios neoliberales. Cada una de esas medidas parecía tener la virtualidad de poder traer el bienestar prometido. Tal vez incluso llegaron a crear expectativas en algunos sectores, pero así como fueron anunciadas, todas ellas han ido demostrado su incapacidad para entregar lo prometido.

Podría objetarse que el fracaso se debe a que el entorno es adverso: barreras para las exportaciones, crisis financieras internacionales, recesión en los mercados más importantes, caída de los precios del café o desastres —desde el Mitch hasta la sequía, pasando por los terremotos. No se puede desconocer que el entorno no es favorable a un desarrollo económico sostenible, pero ya existe suficiente experiencia como para adoptar políticas internas que contribuyan a paliar los impactos negativos de aquél. En lugar de ello y a pesar de la volatilidad de las variables que no controlan, los gobiernos de ARENA siguen poniendo sus expectativas en fuerzas externas, a las cuales continúan atribuyendo unas virtualidades que, está demostrado de sobra, no poseen. El último recurso, los tratados de libre comercio, en particular el tratado con Estados Unidos, ilustra bien esta postura. El gobierno de ARENA cree de una manera ciega que este instrumento multiplicará el empleo y las exportaciones de manera asombrosa, pasando por alto las condiciones que Estados Unidos le impondrá a El Salvador —un tratado de extradición, respeto mucho más estricto a la propiedad intelectual, ratificación y observancia de los tratados más importantes de la Organización Internacional del Trabajo, cumplimiento de las normas básicas para preservar el medio ambiente y garantizar la calidad— y a las cuales éste no ha dado muestras de estar dispuesto a aceptar. Sin embargo, El Salvador estaría bien dispuesto a apoyar de manera incondicional a Estados Unidos en su cruzada contra el terrorismo, una condición que este país impone a sus aliados, en la actualidad. Es cuestionable, por otro lado, qué podrá exportar El Salvador al mercado estadounidense, además de productos textiles maquilados. De todas maneras, el gobierno salvadoreño, al igual que uno de cada cuatro salvadoreños, mira al norte con la esperanza de que de ahí le venga la solución a sus problemas. De hecho, hasta ahora, el único recurso que ha mostrado ser eficaz para luchar contra la pobreza es el de las remesas familiares. Por eso, la retención de los emigrantes es fundamental para la economía nacional, pero el libre tránsito de personas no será contemplado en el tratado con Estados Unidos.

El optimismo gubernamental sobre el futuro del país no resiste un somero análisis desde las realidades económicas y sociales actuales. Ahora bien, si éstas son enjuiciadas desde el desempeño de los grandes capitales, hay razones para compartir la postura gubernamental. Al gran capital salvadoreño y a su socio transnacional no les va nada mal. Los últimos informes acerca de las ganancias de los bancos, por ejemplo, son realmente asombrosos, dadas las condiciones prevaletientes. A la mayoría de las empresas que adquirieron los servicios públicos tampoco les va mal. Esto significa que los resultados positivos, en los cuales el gobierno fundamenta su optimismo, no se distribuyen por igual. Esa desigualdad no puede atribuirse a que unos sí trabajan y los otros no, a que unos sí aprovechan las oportunidades y los otros no, sino a que la organización social de la economía es, en lo fundamental, desigual y no parece que pueda ser de otra manera con el modelo vigente. No es simple

casualidad que, en la práctica, el único interlocutor que el gobierno de ARENA reconoce y cuyos dictados acepta, justificándolos como bienestar universal, sea el gran capital.

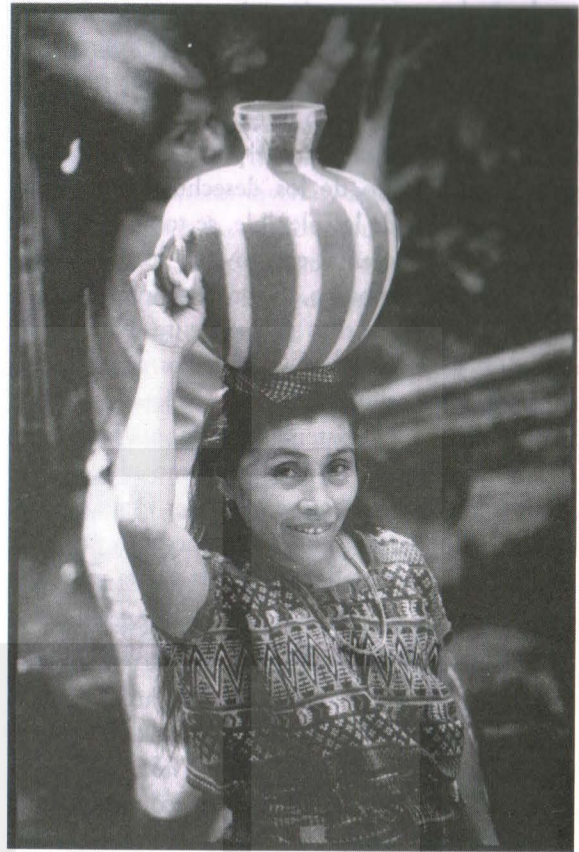
Es claro que lo que se ve de la realidad depende del lugar desde dónde se la observa. Por eso es que unos, los menos, encuentran con facilidad la lógica del discurso gubernamental; pero para los demás, esa lógica es muy dudosa o simplemente inexistente. Aun cuando el desde dónde determina lo que se mira, la mirada siempre debe intentar abarcar la totalidad de la realidad y no sólo una parte. El problema del discurso gubernamental no es sólo que observa la realidad desde el gran capital, sino que lo que mira lo extrapola a la totalidad, haciendo desaparecer aquella parte que no encaja o que contradice su visión, y así lo impone a la sociedad como verdad, a través del control que ejerce sobre los medios de comunicación y la prensa.

La producción crece a un ritmo de apenas el dos por ciento, el cual resulta insuficiente para hacer retroceder la pobreza; para conseguir esta meta, habría que triplicar esa tasa de crecimiento. Peor aún, los dos pilares en los que descansa la actividad económica en la actualidad, las exportaciones de maquila y las remesas familiares, comienzan a dar señales de vulnerabilidad.

3. Rechazo social de un modelo fracasado

Es preciso reconocer, sin embargo, que los gobiernos de ARENA pensaron, en algún momento, contrarrestar el costo que para la población tendrían sus medidas económicas, protegiendo al consumidor y reduciendo la pobreza de manera significativa. De ahí que los jefes de sus gobiernos hablen, en términos poco usuales, de estar al servicio de los pobres. Pero la improvisación, la dependencia de factores externos, la vulnerabilidad y, en definitiva, su compromiso con garantizar la rentabilidad del gran capital, dieron al traste con esas pretensiones. No pusieron los medios para conseguir las metas que anunciaron, bien porque no pudieron o bien porque era contrario a los intereses del gran capital, que para ellos constituye su prioridad. Hablaron también de promover la participación de la sociedad en la propiedad privatizada y de evitar las prácticas del monopolio, pero las tendencias del gran capital a concentrar y acumular fueron más fuertes que las intenciones esbozadas por estos gobiernos. De esta manera, el capital salvadoreño se revitalizó con la penetración del capital transnacional a costa del bienestar de la población, la cual vive en gran aflicción y cada vez con menos recursos, a causa de una voracidad capitalista escandalosa e inmoral —tal como lo ilus-

tra el doble cobro de la compañía distribuidora y la banca por colecturía de los servicios de electricidad, agua y telecomunicaciones—, que la despoja de lo poco que le queda. Es una población que se siente desamparada, tanto por el gobierno como por los que deberían ser sus dirigentes naturales. Se siente cada vez más la ausencia de dirigentes que recojan e interpreten su aflicción y la conviertan en impulso para la movilización popular alrededor de un proyecto alternativo, que además sea viable y democrático. El despojo y el desamparo han llevado a la población a buscar subterfugios para sobrevivir.



La población ha encontrado salidas para su situación concreta, evitando la confrontación con el orden establecido. Aun cuando estas soluciones son limitadas y los refugios son mundos contruidos artificialmente para resguardarse de un medio hostil, pueden ser interpretadas como rechazo al orden imperante. La población ya no tiene mucho interés en convertirse en interlocutora de un gobierno que representa casi en exclusiva al orden establecido y que se ha mostrado incapaz para resolver el conflicto social. De hecho, las invitaciones a la participación ciudadana han desaparecido casi por completo del discurso gubernamental, resultado de una actitud prepotente. El gobierno y la clase política desprecian al pueblo al cual consideran ignorante y, aunque aducen gobernar en su nombre, no consideran necesario tomarlo en cuenta a la hora de decidir sobre su destino. Es la prepotencia de quien está acostumbrado a abusar de los demás y la autosuficiencia de quien se sabe intocable a la rendición de cuentas. En estas circunstancias, el diálogo y el reclamo están de más, quedando como alternativas la protesta y la huida.

La protesta callejera es un acontecimiento, hasta cierto punto, corriente en la vida nacional, así como también la represión policial que la contiene y

con lo cual se genera más violencia. Es una protesta abierta, cuyo alcance es limitado, que ocurre cuando un sector considera que su situación, ya de por sí precaria, se ha vuelto intolerable, por una nueva presión o circunstancia adversa —excesivo cobro por algunos de los servicios, deficiencias en el servicio de agua, disputa por el espacio en la vía pública, construcción de anillo periférico, depósito de los desechos sólidos, etc. Cuando la población es llevada al límite de lo tolerable, se toma la calle y su protesta se torna ruidosa, cuando no violenta, con lo cual corre el riesgo de que sea reprimida por la policía. Sin embargo, la protesta popular no es mayor ahora que hace cinco años, aunque sí es más violenta. No son, pues, los trabajadores, ni sus sindicatos los que se toman las calles para expresar reclamos y frustraciones, sino diferentes grupos sociales, exasperados por la falta de atención gubernamental. Su simple existencia testimonia la ausencia de espacios para resolver el conflicto social por medios democráticos. Los afectados no encuentran canales para hacerse oír o para ser escuchados, en su desesperación, y el gobierno no parece tener otro medio a su disposición que la imposición autoritaria, la cual debe ir apoyada por la represión policial.

Ahora bien, la posibilidad de que estas protestas se lleguen a articular en un movimiento más amplio contra el gobierno es muy remota, porque esto último supone una capacidad de organización de la cual estos movimientos de protesta carecen y porque los protestantes sólo buscan respuesta a sus necesidades inmediatas. Los descontentos no aspiran a transformar el régimen político, al cual dan por perdido, sino a encontrar una satisfacción de orden económico, que mejore su situación actual. Es la misma razón que los mueve a emigrar. No son refugiados políticos, sino económicos. Al igual que el gobierno, sus expectativas están en el norte, en la emigración o en la remesa familiar, no en el cambio social o político.

La emigración, por lo tanto, una forma de huida, es también un rechazo al orden económico y social establecido. Todavía es muy alto el número de adultos que desea emigrar de El Salvador. Los 600 salvadoreños que fueron a dar a Suecia, engañados por una atractiva oferta de asilo, han vuelto a recordar la dramática realidad de la emigración. Pero lo novedoso de esta huida es que buena parte de los emigrantes proviene de los sectores medios, quienes, ante una simple promesa sin mucho fundamento, vendieron sus pertenencias y abandonaron el país. Consciente de esta realidad y de su importancia social y económica, el gobierno salvadoreño insiste ante su homólogo estadounidense en que retenga a los indocumentados que residen en su territorio. La situación es tan desesperada para los que deciden abandonar la tierra que los vio nacer, que los riesgos mortales que corren para llegar hasta el otro lado de la frontera estadounidense no los detienen y están obligando al gobierno salvadoreño a prestar atención a las rutas que siguen en huida. No es este el lugar para insistir en esta salida tan aceptada, porque ya lo hicimos en otro editorial. Valga agregar aquí que *ECA* prepara una edición especial, dedicada a la emigración.

Otra forma de rechazo, más violenta y perturbadora que las manifestaciones callejeras, son las bandas juveniles. Estas se han abierto un espacio propio, que les ha sido negado por la sociedad organizada, para expresar sus ansiedades y expectativas. De hecho, son jóvenes que han sido expulsados de sus familias, de la escuela, de los templos y de las organizaciones comunitarias —con frecuencia inexistentes. De maneras diversas, aquellas instituciones que les debieran haber ofrecido espacios para la socialización, los han expulsado y, además, los rechazan y condenan social y judicialmente —cuando los lanzan a unos centros de detención, donde para sobrevivir hay que hacer uso de la violencia con el consabido saldo de muertos y lesionados. Al no encontrar un espacio para crecer y expresarse, estos grupos de jóvenes se han creado un mundo paralelo y enfrentado con el de los adultos socialmente aceptados. Son grupos con su propia escala de valores, normas y expresiones, pero también cerrados a los extraños. La violencia y el abuso son parte integrante de la vida de la banda, pero en ella sus miembros encuentran identidad y acogida plena. Como están persuadidos de que, en esas circunstancias, morirán jóvenes, procuran vivir de manera intensa el poco tiempo del cual disponen e incluso engendrar un hijo, que los proyecte en el tiempo. La dependencia de los estupefacientes, uno de los estímulos preferidos para alcanzar la intensidad, los lleva a agredir para robar y adquirirlos. La búsqueda de experiencias intensas los empuja a explorar las actividades del crimen organizado, hasta que acaban militando en sus filas. Si no es la intoxicación la que pone fin a su corta vida, lo es la muerte violenta en un enfrentamiento con grupos rivales o en acciones criminales. Muy pocos logran sobrevivir en este sórdido mundo juvenil. Dado que no se ha optado por abrir espacios a estos jóvenes, que no necesariamente proceden de familias desintegradas, al gobierno no le queda otra alternativa que recurrir a la represión, acelerando el proceso de descomposición social.

El problema del discurso gubernamental no es sólo que observa la realidad desde el gran capital, sino que lo que mira lo extrapola a la totalidad, haciendo desaparecer aquella parte que no encaja o que contradice su visión, y así lo impone a la sociedad como verdad, a través del control que ejerce sobre los medios de comunicación y la prensa.

En el otro extremo se encuentra una reacción popular de carácter interno y pacífico: el refugio en las agrupaciones de corte pentecostal. Esta reacción es, simultáneamente, huida y rechazo explícito del orden social predominante. Los grupos pentecostales han crecido de manera sorprendente y rápida, en las últimas décadas —más del lado de las iglesias de la reforma que del lado de la católica romana, donde también se da este fenómeno, aunque en

menor medida. El pentecostalismo posee una serie de características que lo vuelven atractivo para unas clases populares, que se sienten desamparadas y que buscan un asidero seguro para sus vidas. Son estas características las que explican su expansión y su éxito, y no tanto las interpretaciones equívocas que lo atribuyen a una intervención perversa del imperialismo estadounidense. En efecto, el pentecostalismo es atractivo no porque ofrezca una nueva doctrina, sino porque promueve una nueva experiencia de Dios, directa y sin mediación. Se trata de una experiencia de mediación popular de lo sagrado. La naturaleza popular de la mediación no se da en menoscabo del encuentro con Dios, el cual es intenso y con poder como para dar un sentido nuevo a la vida de una persona. El creyente experimenta que el encuentro transforma su vida totalmente. A partir de él, cambia su manera de verse a sí mismo y de ver a su familia y la realidad. Esta experiencia de encuentro y cambio se manifiesta en éxtasis diversos, porque no hay palabras para describirla. Los éxtasis son su lenguaje. Por lo tanto, es posible verificar la transformación de la persona, con lo cual el mensaje se vuelve más atractivo.

Al mismo tiempo que el creyente adquiere una nueva identidad, pasa de la desesperación y el desamparo a la acogida en una comunidad de creyentes como él, la cual le otorga un nuevo sentido a su vida. Este encuentro proporciona así nueva identidad a sectores sociales que consideran fracasada su existencia, ya sea por adversidades de orden económico, social, familiar o laboral. El encuentro con una comunidad, por lo general pequeña, en la cual el creyente halla aceptación plena e incondicional, es parte fundamental del proceso. La comunidad está integrada por personas que, como él, también han experimentado el rechazo, la exclusión y la soledad. En ella halla apoyo y seguridad. Desde el momento en que el creyente entra a formar parte de esta comunidad, se siente llamado a dar testimonio de los dones recibidos y, en consecuencia, se vuelve misionero —no como una nueva obligación, sino como una necesidad de su nueva vida. La dimensión misionera de estos grupos es clave para explicar su crecimiento así como el lenguaje popular con el cual el creyente comunica a otros como él su experiencia de Dios y las transformaciones personales, familiares y comunitarias por las que ha pasado. El discurso testimonial es narrativo y está expresado de una manera simple y comprensible para un auditorio popular. Es el mismo lenguaje que utiliza el pueblo para comunicarse y compartir sus experiencias. No obstante su enorme expansión, no es previsible que estos grupos lleguen a convertirse en un movimiento. Son grupos aislados, reunidos alrededor del pastor, sin capacidad, ni interés, para abrirse a la universalidad. Esta limitación y su visión apocalíptica los enajenan de la realidad adversa que los rodea. Es perder tiempo ocuparse de ella, puesto que su destrucción es inminente. Lo único realmente importante es ser contado entre los que sobrevivirán a su destrucción.

En este panorama sombrío e incluso amenazador, los terremotos han permitido que surjan experiencias positivas, que representan alternativas que,

debidamente cultivadas, podrían conducir a una forma de gobernar más democrática y consistente, haciendo la vida individual y social más tolerable. La novedad y el éxito de estas experiencias radica en haber tomado en cuenta a los actores claves en la toma de decisiones, en haberse esforzado por ir más allá de la construcción de una unidad habitacional, considerando el acceso a los servicios básicos, a la infraestructura comunitaria y a las fuentes de empleo local, en haberlas integrado en un plan más amplio de manejo del territorio, y en haber promovido la participación del gobierno y las organizaciones comunitarias locales. Estas incluso han llegado al extremo de desafiar a quienes les han pretendido imponer unas condiciones de vida con las cuales no están de acuerdo. Es cierto que estas experiencias han sido pocas y aisladas. De ahí que su impacto se haya limitado casi sólo a quienes han tomado parte en ellas; pero esta falta de proyección no les resta mérito. Las hay no sólo en el campo de la vivienda, sino también en el del desarrollo económico local. Estas experiencias son testimonios palpables de que existe y es posible una alternativa al modelo vertical y autoritario por su énfasis en la asociación de los integrantes de una comunidad o localidad, por proporcionar espacios para una participación real para discutir asuntos de interés y decidir sobre los mismos, por su impacto multiplicador y por fortalecer a la autoridad local así como también a la organización comunitaria. Políticamente, señalan un camino viable para que la sociedad tome en sus manos las riendas de su destino, puesto que el gran capital no impulsará cambios contrarios a su interés principal de obtener la máxima ganancia, en el menor tiempo posible.

La reconstrucción pudo haber sido una buena oportunidad para replantear los fundamentos de la situación actual e impulsar un cambio de mediano y largo plazo; en vez de ello, se optó por continuar de la misma manera. La oportunidad abierta por los terremotos fue cerrada abruptamente el 11 de septiembre. A partir de entonces, la lucha contra el terrorismo y la obsesión por la seguridad desplazaron los intentos por abrir espacios para la democratización. En los meses sucesivos fue apareciendo con claridad meridiana el perfil de un Estado autoritario, apoyado en una policía también autoritaria. Su razón de ser es la conservación de un modelo económico y social incompatible con un régimen democrático, porque sólo ofrece garantías económicas a un grupo reducido y privilegiado, con menoscabo de las otras libertades. De esta manera, los terremotos cerraron anticipadamente la transición de postguerra. La nueva era ha dado comienzo con la captura ilegal de un diputado rebelde de la derecha, el allanamiento de la Asamblea Legislativa y una violenta agresión física contra la prensa por parte de la policía. Estos hechos han evidenciado que ninguna persona, aun cuando posea fuero, o institución, uno de los órganos del Estado, escapa a su poder.

San Salvador, 5 de marzo de 2002.